Título: Política Económica y Desarrollo Industrial. Los casos de Brasil y Argentina en perspectiva comparada (1990-2008).

(Envio para Sessões de Comunicações)

Autor: Agustin Wydler (UBA-FLACSO-CONICET)

Area: 4. Economia, Estado e Desenvolvimento

Subarea: 4.3 Estado e Politicas Públicas

Resumen Ampliado:

El trabajo analiza las estructuras productivas, sus transformaciones recientes y las políticas industriales en Argentina y Brasil entre 1990 y 2008, con el objetivo de dilucidar la capacidad del Estado para orientar la estructura productiva en capitalismos periféricos. Para ello se analizan, en primer lugar, la estructura económica en general, e industrial en particular, en ambos países. Luego se puntualizan las políticas implementadas tanto en el período de apertura económica de sesgo neoliberal como en el período de reflujo de este discurso hacia otro más keynesiano-intervencionista (2003-2008). Si bien las diferencias históricas y las transformaciones de la década del '90 tuvieron un impacto más negativo en la estructura industrial Argentina, el período post reformas neoliberales tiende a tomar, en ambos países, senderos supuestamente parecidos. Sin embargo, un análisis más profundo deja otros resultados. Si en Argentina se destaca una política macro más heterodoxa y niveles de promoción industrial bajos, Brasil presenta serias continuidades en su política macro ortodoxa a partir de las "metas de inflación", a la vez que lanza un interesante paquete de políticas (la denominada PITCE y sus sucesoras). Las medidas concretas adoptadas en Brasil, pueden diferenciarse a partir de cuatro ejes:

- Respecto a la **Innovación tecnológica**: se promulgó la Ley de Innovaciones (nº 10.973/2004), Incentivos para el sector informática Programas de nanociencia y nanotecnología, Programa de Apoyo a la Investigación en Pequeñas Empresas (PAPPE), que se complementa con el Programa de Creación de Tecnología (CRIATEC)
- En relación a la **inserción externa y las exportaciones**: se crea el Sistema Radar Comercial, se renueva el Regimen Aduanero de Entreposto Industrial Sobre Control Informatizado (RECOF), se renueva la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS), se utiliza el sistema de *Draw back* como incentivo fiscal
- En términos de la **modernización industrial**: Modercarga y Modermaq; se instalan los Foros de Competitividad: se reinstalaron seis (Plástico, Cuero y Calzados, Construcción Civil, Textil y de Confecciones, Madera y Móviles y Complejo Electrónico) y se crearon ocho nuevos (Industria Aeroespacial, Siderurgia, Farmacéutica, Automotriz, Bienes de Capital, Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos, Industria Agroquímica y Piedras y Joyas) en el marco del programa "Competitividad de las Cadenas Productivas" del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDICE)
- En relación a las **opciones estratégicas**: Programa para el Desarrollo de la Industria de Software y Servicios de Tecnología de la Información (PROSOFT), financiado por el BNDES, que destina 100 millones de reales para promover la producción, comercialización y exportación de software; Semiconductores: se instrumentó un plan de

fortalecimiento para el sector, incentivando una mayor utilización de componentes, partes y piezas nacionales y estimulando la inversión extrangera; Programa de Apoyo al Desarrollo del Complejo Industrial de la Salud (PROFARMA), financiado por el BNDES; la industria de bienes de capital recibió una serie de incentivos: reducción de la alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) del 5% al 2%, régimen tarifario especial para la importación de bienes de capital (reducción del 2%), Programa de Financiamiento a Sustituidores Nacionales de Equipamientos, Materiales y Servicios Vinculados, financiado por el BNDES (500 millones disponibles) y destinado a las grandes empresas (comprador o fabricante).

Nada parecido se verificó en Argentina, donde existen en la actualidad más de 50 instrumentos y programas de mejora de la competitividad dentro del ámbito de la administración pública nacional, manejados por más de 20 agencias y dependencias estatales nacionales. Los beneficios otorgados son variados: créditos a tasas subsidiadas, subsidios monetarios directos, desgravaciones impositivas y/o fiscales, provisión de asistencia técnica y otorgamiento de facilidades financieras (de Castro, 2007; Porta y Baruj, 2005). Un cálculo realizado en base al "costo fiscal" estima que estos programas habrían representado 6781 millones de pesos (Castro, 2007): el monto total, sin embargo, ha de ser muy superior ya que solo se contabilizan aquellos programas sobre los que se tiene información financiera. Resta, asimismo, analizar y comparar las partidas presupuestarias destinadas a cada programa. Por otro lado, se suman cerca de 30 programas de tinte similar en el ámbito provincial (Porta y Baruj), lo que elevaría todavía más la cifra. Su análisis, sin embargo, no sólo debe ser cuantitativo, sino fundamentalmente cualitativo. Es aquí donde surgen inconvenientes de toda índole: inexistencia de instancias de evaluación por resultado y monitoreo de desempeño con metas cuantitativas, ausencia de mecanismos de control externo u auditorías, altísimo grado de superposición entre los programas y funciones de los organismos como consecuencia de la falta de coordinación inter-agencia, entre otros (id.).

En este sentido, los problemas de coordinación institucional y, por tanto, de regulación económica, aparecen, en ambos casos, como uno de los principales obstáculos hacia una política integral de desarrollo industrial: su ausencia, peligrosamente, coloca buena parte estas medidas como mecanismos de "reducción de costos" para el capital, aumentando el costo fiscal y generando un mecanismo de redistribución regresiva del ingreso. Los márgenes de maniobra del Estado para orientar la estructura productiva se reducen significativamente, en momentos en que ambos países están encontrando serios límites estructurales al crecimiento económico producido luego de la recuperación de principios de la década, jaqueados en tiempos más recientes por la crisis económica global.